

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de tutela**
Radicación: **2023-00160**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por la señora **SILVANIA COSSIO ARRIETA** en contra de la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMAS**, en adelante **UARIV**.

II. ANTECEDENTES:

2.1.- HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Manifiesta la accionante que se encuentra incluida en el registro único de víctimas por los hechos de desplazamiento forzado, que es madre cabeza de hogar con un hijo menor de edad.

2.1.2.- Sostuvo que, actualmente se encuentra en condición de discapacidad, por causa de las lesiones permanentes ocasionadas por su expareja, quien intentó asesinarla.

2.1.3.- Indica que, se encuentra dentro de las causales del artículo 4 de la resolución 1049 de 2019 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas solicite la priorización de su medida de indemnización.

2.1.4.- Señala que mediante oficio radicado No. 20226005015152911 del 29 de diciembre de 2022 solicitó a la accionada que: *"(I) se me entregue el acto administrativo de reconocimiento de la indemnización administrativa en ruta prioritaria (II) se programe desembolso de la indemnización en la vigencia 2022 (III) se desembolse mi atención humanitaria de manera inmediata (IV) se notifique del resultado del proceso de medición carencias vigencia 2023."*

2.1.5.- Mediante oficio Radicado No. 20236005010418241 del 8 de febrero de 2023, realizó un segundo requerimiento de su solicitud.

2.1.6.- A la fecha no ha recibido respuesta de las solicitudes, por lo anterior considera que la accionada ha vulnerado su derecho fundamental de petición.

2.2. PETICIÓN:

Solicita:

"Solicito en garantía a mi derecho fundamental de derecho de petición, se ordene señor juez a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que responda de fondo mis peticiones y proceda a: (I) se me entregue el acto administrativo de reconocimiento de la indemnización administrativa en ruta prioritaria (II) se programe desembolso de la indemnización en la vigencia 2022 (III) se desembolse mi atención humanitaria de manera inmediata (IV) se notifique del resultado del proceso de medición carencias vigencia 2023."

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 14 de marzo de 2023 se admitió la acción constitucional (archivo digital 07), en el que se ordenó notificar a las partes, y solicitarle a la entidad accionada contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTAS:

UARIV (archivo digital 09): señalo en su respuesta que el caso concreto de SYLVANIA COSSIO ARRIETA se procedió a verificar en la base de datos y fue posible determinar que se reconoce para el periodo correspondiente a un año dos giros a favor del hogar consistente en OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$810.000), cada uno, cada uno; de los cuales se realizó el respectivo cobro del primer giro el día 24 de febrero de 2022; el cual fue cobrado por SYLVANIA COSSIO ARRIETA quien es la persona que figura como autorizada para recibir los recursos a nombre del grupo familiar; que el segundo giro se encuentra en las validaciones correspondientes para su recolocación o colocación y se notificara a la víctima una vez se cuente con los recursos en el operador de pagos para cobro.

Así mismo, indicó que, los componentes entregados al grupo familiar de la accionante fueron por un año de acuerdo con la Resolución No. 0600120233948730 de 2023 "Por medio de la cual se decide sobre una solicitud de Atención Humanitaria". Para conocer el contenido completo de la decisión proferida por la Unidad para las Víctimas, invitamos a la accionante a que envíe autorización de notificación electrónica desde un correo personal y de uso exclusivo, mencionando: Nombre, cédula, dirección y teléfono, a la cuenta unidadenlinea@unidadvictimas.gov.co con el fin de notificarle la actuación administrativa, a través del correo electrónico; así mismo nos permitimos indicarle que una vez se encuentre notificada la presente decisión la accionante puede interponer los recursos de ley si no se encuentra de acuerdo con la misma; lo cual fue informado en la comunicación dirigida al accionante bajo código lex 7284945.

Que mediante la comunicación bajo código lex 7275407 le fue enviada a la accionante copia de la RESOLUCIÓN No. 0600120233948730 de 2023 sin que ello represente trámite de notificación.

Para el caso de la accionante la señora SYLVANIA COSSIO ARRIETA fue contestada de fondo en virtud de la presente acción de tutela mediante la comunicación bajo código lex 7284945, la Unidad para las Víctimas le brindó una respuesta de fondo por medio de la Resolución N°. 04102019-667025 - del 20 de

mayo de 2020, en la que se decidió otorgar la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante desplazamiento forzado y aplicación del método Técnico de Priorización con el fin de terminar el orden de otorgamiento de la medida de indemnización.

“EN CUANTO A LA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.”

Que el procedimiento se encuentra contemplado en la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019, la cual tuvo lugar como consecuencia de la orden proferida por la Corte Constitucional, al interior del Auto 206 de 2017, en el cual se dispuso que el Director de la Unidad para las Víctimas en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, debía reglamentar el procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos.

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.2.1. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

- Legitimación por activa:

El artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del

Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que *“la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”*.

En el caso bajo examen, la señora **SILVANIA COSSIO ARRIETA** acudió a la acción de tutela para que se protegieran sus derechos fundamentales de petición e igualdad, los cuales afirma están siendo conculcados como consecuencia de la falta de una respuesta fondo por parte de la entidad accionada a su solicitud. Por lo anterior, se encuentra legitimada en la causa por activa para presentar la acción constitucional.

- Legitimación por pasiva

Como quiera que la legitimación pasiva atiende a la capacidad legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, el inciso primero del artículo 86 Constitucional señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales *“resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”* o por cualquier particular. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que la acción se puede invocar contra una autoridad pública que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental.

En el asunto *sub-judice*, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva de la **UARIV**, a la que se le endilga la presunta actuación que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante, y que se relaciona con la omisión de darle una respuesta de fondo a su petición.

- Inmediatez

La Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU-961 de 1999 que *“La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”*.

En el presente asunto, se tiene que, entre la fecha de radicación de la petición por parte de la accionante ante la **UARIV**, el 29 de diciembre de 2022, y en la que presentó la acción constitucional, 13 de marzo de 2023 (archivo digital 05), han transcurrido más de veinte (20) días por lo cual, este Despacho considera que se cumple con este requisito.

- Subsidiariedad

Al respecto, en Sentencia T-422 de abril 26 de 2001 la Corte Constitucional señaló: *“(…) la naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de*

ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que no puede utilizarse para remplazar los procesos judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente”.

En el presente caso, la parte actora no cuenta con un mecanismo judicial eficaz diverso al que nos ocupa para obtener respuesta de fondo por parte de la entidad accionada a la petición que elevó el 29 de diciembre de 2022 y 8 de febrero de 2023, lo que hace viable esta acción.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se continuará con el examen de los asuntos de fondo.

4.3. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)”*. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

“1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:

- (i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;*
- (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;*
- (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;*
- (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable”.*

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

“la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina

constitucional, esta garantía constitucional “consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada”. Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, “pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución”

A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: “(...) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)”.

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

V. CASO EN CONCRETO:

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si la **UARIV** vulneró los derechos fundamentales de petición e igualdad de la señora **SILVANIA COSSIO ARRIETA** respecto de la solicitud que radicó el día 29 de diciembre de 2022 y 8 de febrero de 2023.

5.2.- Se encuentra incorporada al expediente la petición elevada por el accionante ante la **UARIV** a través de la defensoría del pueblo el día 29 de diciembre de 2022 y 8 de febrero de 2023 bajo el radicado No **20226005015152911** y 20236005010418241, solicitando:

“(...)”

Radicado: 20226003015132
Fecha radicado: 2022-12-29

Bogotá D.C.

Doctora:
MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
DIRECTORA UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Carrera 85 D # 46 A- 65 - Complejo Logístico San Cayetano
Correo Institucional: servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co
Bogotá, D.C.

Referencia: GESTIÓN DIRECTA URGENTE Y PREFERENTE No. 2031 - 2022 APRC CASO SYLVANIA
COSSIO ARRIETA C.C.45543798

Referencia:

Respetado doctora Tobón:

El Centro de Atención al Ciudadano ha tenido conocimiento del caso del ciudadano SYLVANIA COSSIO ARRIETA C.C.45543798, quien solicito nuestra intervención por la situación que se le ha presentado con esa institución.

La ciudadana se encuentra en grave estado de vulnerabilidad por su condición de madre cabeza de hogar y en condición de discapacidad. Al encontrarse dentro de las causales del artículo 4 de la resolución 1049 de 2019 para ser priorizada en su medida de indemnización, radico la documentación requerida sin que a la fecha ha sido informado de su priorización, ni de la prórroga de atención humanitarias.

Por lo anterior se requiere de su despacho dar respuesta de fondo al ciudadano en las siguientes peticiones: (i) se le entregue el acto administrativo de reconocimiento de la indemnización administrativa en ruta prioritaria, (ii) se programe desarrollo de la indemnización en la vigencia 2022 (iii) se desembolese mi atención humanitaria de manera inmediata (IV) se notifique del resultado del proceso de medición carencias vigencia 2023

Quedamos en espera de su respuesta a la ciudadana quien puede ser contactada en la Carrera 51 No. 49B Sur 36 interior 4 Barrio Molinos Del Sur localidad de Rafael Uribe, correo sylvaniacossio@gmail.com, con copia a nuestras oficinas Calle 55 No. 10 -32, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente y conforme a lo preceptuado en la Ley 24 de 1992, tal como se establece a continuación:

ARTÍCULO 15. Deber de informar. Todas las autoridades públicas, así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, deberán suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor, sin que les sea posible oponer reserva alguna, salvo los casos que la Constitución lo disponga. La información deberá ser suministrada en un plazo máximo de cinco días.

ARTÍCULO 16 Deber de auxilio: Todas las autoridades públicas y todos los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público están obligadas, en el ejercicio de sus funciones, a auxiliar de manera activa e inmediata, con ayuda técnica, logística, funcional o de personal, a la Defensoría del Pueblo.

En las visitas a entidades o autoridades públicas o a los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, el Defensor tendrá pleno acceso a la información, recibirá asistencia técnica para la comprensión de asuntos especializados, podrá solicitar las explicaciones que sean del caso y citar a cualquier persona para que rinda testimonio sobre los hechos objeto de indagación.



Fecha : Diciembre 29 2022, a las 10:10:08 am
Codigo de Seguridad : efd74488a08c7e065ed9f89a856f5de2
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA
Nos Unen Tus Derechos.

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20236005010418241

Radicado: 20236003010418.

 Fecha radicado: 2023-02-08.

Doctora.
MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
Directora de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Carrera 85D No. 46A – 65 - Complejo logístico San Cayetano.
Bogotá, D.C.

Referencia: SEGUNDO REQUERIMIENTO - GESTIÓN DIRECTA URGENTE Y PREFERENTE GD No. 130 DE 2023 - AFAB Caso de la señora **SYLVANIA COSSIO ARRIETA** (Al contestar por favor cite el Número de la Gestión).

Respetada Doctora:

A las instalaciones del Centro de Atención la Ciudadana se ha hecho presente la señora **SYLVANIA COSSIO ARRIETA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **45.543.798**, solicitando nuestra intervención por la situación que se le ha presentado con esa institución.

La ciudadana incluida en el registro único de víctimas por el hecho de **DESPLAZAMIENTO FORZADO**. Manifiesta que se encuentra adelantando ante su institución la inclusión en ruta prioritaria debido a que ostenta el criterio de prioridad **DISCAPACIDAD CERTIFICADA**. Afirma que no ha sido notificado de la inclusión a esta ruta.

Por lo anterior se requiere:

- i. Se genere inclusión a ruta prioritaria de su caso, considerando que ostentan el criterio de prioridad **DISCAPACIDAD CERTIFICADA**, en los términos de la resolución 1049 de 2019 (ii) Se genere priorización de su indemnización administrativa y, en consecuencia, la posterior notificación oportuna de la disponibilidad del recurso.

Quedamos en espera de su respuesta al usuario quien puede ser contactada en la Carrera 5 L No. 49B Sur 36 interior 4 Barrio Molinos Del Sur localidad de Rafael Uribe. Tel: 3024988049 correo sylvaniacossio@gmail.com con copia a nuestras oficinas en la calle 55 # 10-32, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente y conforme a lo preceptuado en la Ley 24 de 1992, tal como se establece a continuación:

ARTÍCULO 15. Deber de informar. Todas las autoridades públicas, así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, deberán suministrar la



Fecha ; Febrero 8 2023, a las 4:33:41 pm
Codigo de Seguridad : e48d80817105e4bfc178f6fd1cf6287
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF



(Página 6, archivo digital 03)

5.3.- Como respuesta, la **UARIV** emitió los siguientes comunicados dirigidos a la accionante:

Comunicación de fecha 15 de marzo de 2023:
(...)”.



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

CAMBIAJOS PARA SERVIR

5. Firma del profesional, cédula o registro médico.	
6. Fecha de expedición de la certificación	

En caso de no contar con los certificados relacionados anteriormente, es válido como soporte de discapacidad la Epicrisis o el resumen de historia clínica expedida por la EPS, que dé cuenta expresa de los datos personales de la víctima, el diagnóstico o los diagnósticos médicos, la discapacidad y su categoría.

Los montos y orden de entrega de la medida de indemnización administrativa dependen de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad; de igual forma, es preciso indicar que solo se realizará la entrega de la medida a las personas que resulten priorizadas para cada vigencia de acuerdo con la aplicación del Método Técnico de Priorización. Finalmente, la entrega de la indemnización administrativa depende de que se cuente con un estado de inclusión en el Registro Único de Víctimas.

Así las cosas, la Unidad para la Víctimas, aplico el Método Técnico de Priorización el 31 de julio de 2022, para determinar, de las personas que fueron reconocidas al 31 de diciembre de 2021 sin criterio de priorización, a cuáles se les realizará la entrega de los recursos durante la presente vigencia de acuerdo con la disponibilidad de recursos destinados para este efecto. Es importante indicar que la distribución del presupuesto asignado para el reconocimiento de la medida indemnizatoria en la siguiente vigencia atenderá al número de víctimas que acrediten los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad y a los compromisos adquiridos de acciones constitucionales pendientes por cumplir antes de la implementación del procedimiento. De igual forma, es importante tener en cuenta, que el número de víctimas a quienes se le puede hacer efectiva la entrega de la medida depende de los montos establecidos para los hechos susceptibles de indemnización.

En virtud de lo antes descrito, no es procedente acceder a su solicitud de realizar el pago de la indemnización administrativa, de fijar una fecha exacta del pago de la indemnización administrativa y de entregar la carta de pago o "carta cheque", el pago de la indemnización administrativa se encuentra supeditado a la aplicación del Método Técnico de Priorización que se llevó a cabo el 31 de julio de 2022, la Unidad para las víctimas se encuentra realizando las validaciones correspondientes para entregar el resultado.

Por último, informamos que el canal autorizado para entregar certificados o documentos que pretendan acreditar alguna situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, es el correo electrónico DOCUMENTACION@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO.

En la presente comunicación se anexa:

- Oficio del resultado del método técnico de priorización de 2021, en cuatro (4) folios.

5.4.- Teniendo en cuenta lo anterior, refulge para este Despacho Judicial que en el presente caso sí se vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante, por cuanto, se advierte que la UARIV, si bien emitió respuesta a la solicitud que le formuló la actora el 15 de marzo de 2023, lo cierto es que esta no fue clara, congruente y de fondo frente a lo requerido por la señora SYLVANIA COSSIO ARRIETA, en la medida que la entidad se limitó a indicarle que *«que el segundo giro se encuentra en las validaciones correspondientes para su recolocación o colocación y se notificara a la víctima una vez se cuente con los recursos en el operador de pagos para cobro. »*, pero sin concretar cuál es el estado actual de su solicitud o si la misma quedó o no debidamente radicada, esto último, con el fin de despuntar el término de los 120 días hábiles con que contaría la accionada para emitir un acto administrativo en el cual se reconozca o se niegue la medida pretendida, tal y como lo dispone el artículo 11 de la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2013 de la UARIV, más aún, cuando a la presentación de la acción constitucional, 13 de marzo de 2023 (PDF 005), ya había vencido el plazo de 15 días para responder la petición de la tutelante (art. 14, Ley 1755 de 2015)

5.5.- Así las cosas, claro es que la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LA VICTIMAS** no resolvió de fondo el requerimiento elevado por la accionante el 29 diciembre de 2022 y reiterado el 08 de febrero de 2023, por lo que se amparara el derecho fundamental de petición y se ordenara a la entidad accionada que en el término máximo de 48 horas contadas a partir de recibida la comunicación , resuelvan de manera clara, congruente y de fondo la solicitud presentada por la señora **SILVANIA COSSIO ARRIETA** el 29 diciembre de 2022 y reiterado el 08 de febrero de 2023, determinación que deberá ser debidamente notificada a la peticionaria.

En mérito de lo expuesto, EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad

de la Ley",

VI. RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR EL DECHO DE PETICIÓN implorado por la señora **SILVANIA COSSIO ARRIETA**, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a las DIRECTORAS TÉCNICA DE REPARACIONES y TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, o a quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, resuelvan de manera clara, congruente y de fondo la solicitud presentada por la señora **SILVANIA COSSIO ARRIETA** el 29 diciembre de 2022 y reiterado el 08 de febrero de 2023, determinación que deberá ser debidamente notificada a la peticionaria.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

CUARTO: Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ